

CERTIFICADO DE RESOLUCIÓN

Con fecha 4 de junio de 2024 el Pleno del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia aprobó la siguiente RESOLUCIÓN:

Referencia: R-014-2023

Fecha: 19-02-2023

Reclamante: [REDACTED]

Representante: [REDACTED]

Administración o Entidad reclamada: AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Información solicitada: COPIA DE LA MEMORIA Y PLANOS DEL EXPEDIENTE 10808/2017-LE O RESOLUCIÓN EXPRESA EN MATERIA DE ACCESO

Sentido de la resolución: ESTIMATORIA

Etiquetas: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

I. ANTECEDENTES

PRIMERO.- Ha tenido entrada en este Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia (en adelante CTRM o Consejo), en la fecha y con el número de registro indicado en las referencias anteriores la reclamación que nos ocupa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, tras la reforma operada por la Ley 7/2016, de 18 de mayo (en adelante LTPC), es competencia del Consejo, resolver las reclamaciones que se formulen por los interesados, contra las resoluciones expresas o presuntas dictadas en materia de acceso a la información pública por las entidades sometidas al control del Consejo, rigiéndose por lo establecido en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y por lo previsto en la LTPC.

SEGUNDO.- Con fecha 25 de octubre de 2022, tuvo entrada a el Ayuntamiento de Murcia instancia por parte de [REDACTED], en la que solicita información y vista de los expedientes administrativos generados en su propiedad, de las posibles licencias para la instalación de vallas de publicidad en la finca con referencia catastral [REDACTED] situada en Avda. Miguel Induráin, calle Ramón y Cajal, 19 B, en Puente Tocinos Murcia, originando dicha solicitud el expediente con número 11225/2022-LE”.

TERCERO.- Con fecha 19/2/23 la interesada, [REDACTED] interpone reclamación ante este Consejo en la que:

“EXPONE:

1.- Tras el fallecimiento de mi esposo [REDACTED] con DNI [REDACTED], el 6 de agosto de 2022, soy la usufructuaria única de la finca registral [REDACTED] en la que están instaladas unas vallas publicitarias gestionadas por la empresa MANEX PUBLICIDAD SL, con CIF [REDACTED] y domicilio en Murcia, pedanía de San Ginés, calle Cardenal Belluga, parcela 28/3 Nave 1 del Polígono Industrial Oeste.

2.- Para su instalación MANEX PUBLICIDAD SL presentó el 17/04/2017 una Declaración Responsable Previa para la Ejecución de Obras, y se le asignó el expediente administrativo 1808/2017-LE.

HECHOS.- Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

La unidad Administrativa de la sección Licencias de Edificación del servicio Disciplina Urbanística me ha trasladado el informe (Registro salida: 2022/2299097 de 30/12/2022). Por el que me niega copia de la memoria y planos del expediente 18058/2017-LE en base al art. 14.1.j de la referida ley que dice

1.- El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:

j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.

El punto 2 del mismo artículo establece que “la aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto”. Estoy pidiendo la memoria y los planos de unas vallas publicitarias

instaladas en mi propiedad, no estoy pidiendo los planos del Banco de España, la fórmula de la CocaCola, de un invento susceptible de ser patentado, Ocultar los datos solicitados es todo lo contrario a la Transparencia y un límite a mi derecho a la información que debe ser corregido.

Solicita:

1.- Copia de la memoria y planos del expediente 10808/2017-LE o Resolución expresa en materia de acceso (art. 24 Ley 19/2013 de Transparencia)”.

CUARTO.- En este Consejo se ha recibido informe del Ayuntamiento de Murcia en el que señala:

“(…)- Con fecha 30 de diciembre de 2022, se notificó a la interesada que podía pasar a recoger la copia del expediente administrativo número 1808/2017-LE por la Oficina de Información de Licencias, informándole, respecto a la solicitud de copia de la memoria y planos del referido expediente, que según indica la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en su artículo 14, punto 1, apartado j: “El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.”

- Con fecha 30 de diciembre de 2022 se dio acceso a la interesada a los documentos administrativos del expediente 1808/2017-LE de forma presencial, retirando ésta una copia de los documentos administrativos obrantes en el mismo, a excepción de la memoria y planos.

- Con fecha 25 de abril de 2023, se le ha remitido a [REDACTED] como interesada en el expediente, el informe del Servicio Técnico de Disciplina Urbanística, Unidad de Inspección Urbanística de fecha 19 de abril de 2023.

- Así mismo con fecha 28 de abril de 2023 se ha remitido notificación al Ingeniero Técnico Industrial, redactor del proyecto y la memoria técnica, la solicitud de acceso a la información pública relativa al expediente 1808/2017- LE, para que en el plazo de 15 días hábiles, realice las alegaciones que estime oportunas y más convenientes a su derecho, las cuales serán tenidas en cuenta por este Ayuntamiento al resolver la solicitud formulada. En caso de no manifestar expresamente por escrito su consentimiento, en el referido plazo, entenderemos que no se permite por parte de dicho técnico la puesta a disposición de los referidos documentos.

- Se acompañan los siguientes documentos:

- 1) Solicitud de [REDACTED] de fecha 25 de octubre de 2022.
- 2) Notificación a [REDACTED] de fecha 30 de diciembre de 2022.
- 3) Comparecencia de [REDACTED] en representación de [REDACTED] de fecha 30 de diciembre de 2022.
- 4) Notificación a [REDACTED] de fecha 25 de abril de 2022.
- 5) Notificación a D. Jesús María González Valverde Ingeniero Técnico Industrial de 28 de abril de 2023.

LA DIRECTORA ACCIDENTAL DE LA OFICINA DE GOBIERNO,

P.D. LA JEFA DE SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA”.

No consta en la documentación enviada que el Ayuntamiento haya dictado acto administrativo, Decreto o resolución expresa sobre la petición de acceso a la documentación solicitada.

QUINTO.- Con fecha 16/4/2024 desde este Consejo se ha notificado al promotor del proyecto el emplazamiento para **que en un plazo de QUINCE (15) días hábiles, presente las alegaciones que estime oportunas** y más convenientes a su derecho, las cuales serán tenidas en cuenta al resolver la solicitud formulada.

En caso de no manifestar expresamente nada, en el referido plazo, se le advertía que resolveremos de acuerdo a lo que consta en el expediente administrativo.

No consta en el expediente que se hayan recibido alegaciones a dicho requerimiento.

VISTOS, la Ley 12/2014 de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (LTPC), en particular sus artículos 23, 28 y 38 y el Capítulo III del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en los sucesivos LPACAP), y demás disposiciones de general aplicación al supuesto objeto de reclamación.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- COMPETENCIA Y ÁMBITO SUBJETIVO.

Que la entidad o Administración ante la que se ejercitó el derecho de acceso a la Información se encuentra incluida en el ámbito subjetivo establecido en el artículo 2.1 de la LTAIBG y por tanto, se encuentra sujeta a la competencia revisora de este Consejo en materia de transparencia. A mayor abundamiento este Consejo aprobó el criterio C.005/2020 sobre la competencia del Consejo sobre las entidades del sector público local, confirmado por el Tribunal Supremo.

SEGUNDO.- PLAZO

En cuanto al plazo para recurrir, señala el artículo 24 de la LTAIBG que:

“1. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.

2. La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.

La competencia para conocer de dichas reclamaciones corresponderá al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley”.

TERCERO.- LEGITIMACIÓN ACTIVA Y REPRESENTACIÓN.

Ni la LTAIPBG, NI LA LTPCRM, determinan quiénes están legitimados para presentar esta reclamación. Por lo que en aplicación del artículo 112.1 de la LPAC, cabe atribuirle a quien haya presentado la solicitud de acceso a la información cuya denegación se impugna, como es el caso que nos ocupa.

CUARTO.- CAUSAS DE INADMISIÓN

Que el artículo 116 de la LPACAP, establece como causas tasadas de inadmisión de un recurso administrativo:

- a) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra Administración Pública. El recurso deberá remitirse al órgano competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
- b) Carecer de legitimación el recurrente.
- c) Tratarse de un acto no susceptible de recurso.
- d) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso.
- e) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.”

A priori, no se aprecia la concurrencia de ninguna de las causas de inadmisión a que alude este precepto.

QUINTO.- INFORMACIÓN PÚBLICA.

La información cuyo acceso se reclama, que se ha detallado en los antecedentes, es información pública según el artículo 13 de la LTAIBG. Se trata de **“COPIA DE LA MEMORIA Y PLANOS DEL EXPEDIENTE 10808/2017-LE O RESOLUCIÓN EXPRESA EN MATERIA DE ACCESO”**.

Hay que destacar que la reclamada:

No ha dictado acto administrativo, decreto o resolución estimando o desestimando el derecho de acceso.

Señalar que la administración reclamada, en el trámite de alegaciones que se le ha concedido, ha remitido el expediente y ha alegado que, respecto a la solicitud de copia de la memoria y planos del referido expediente, que según indica la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en su artículo 14, punto 1, apartado j: “El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.

No especifica el perjuicio que se produce en este caso concreto en el secreto profesional o en los derechos de propiedad intelectual e industrial.

Ni en el expediente que ha remitido el Ayuntamiento ni en el trámite de alegaciones que desde este Consejo se ha dado al promotor del proyecto consta que se hayan formulado alegaciones por parte del mismo.

No consta en la documentación remitida por el Ayuntamiento que se haya dictado Decreto o Resolución denegando el acceso a la información solicitada.

Ha de tenerse en cuenta que la LTAIBG tiene por objeto “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”. A estos efectos, su artículo 12 reconoce **el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública”, en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución** y desarrollados por dicha norma legal. Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG se define la “información pública” como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”.

En función de los preceptos mencionados la LTAIBG reconoce y regula el derecho a acceder a información pública que esté en posesión del organismo al que se dirige, bien porque él mismo la ha elaborado, bien porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas, con el requisito de que se trate de un sujeto incluido en el ámbito de aplicación de la propia Ley.

SEXTO.- OBLIGACIÓN DE RESOLVER

Centrándonos únicamente en la revisión de la actuación administrativa en el terreno del derecho de acceso a la información, el reclamado **no ha atendido la petición de acceso a esta información pública** que se le presentó, ni ha dictado Decreto o Resolución expresa denegando el acceso a la información solicitada.

Conviene recordar una vez más desde este Consejo que **la Administración está obligada a resolver, de manera expresa**, y además, en la resolución que ponga fin al procedimiento, **ha de decidir sobre todas**

las cuestiones planteadas por el solicitante, de manera congruente con las mismas, ex artículos 21 y 88 de la LPACAP.

Establece el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector Público, que las administraciones públicas, en su actuación y en sus relaciones, deberán respetar entre otros los principios de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional, además de los de participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. Se trata de un conjunto de principios cuya observancia obligatoria van configurando a favor de los ciudadanos su **derecho a una buena Administración**.

En este sentido el deber de la Administración de resolver, de manera motivada y congruente es consustancial al estado de derecho y se impone, como vemos, por nuestra legislación administrativa y también constitucional. Ha de tenerse en cuenta que en el ámbito de la Unión Europea el artículo 41 de la Ley Orgánica 1/2008, de 30 de julio, por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Lisboa, Carta de Derechos, **concede el derecho a todos los ciudadanos a una buena administración que incluye, entre otros derechos, la obligación que incumbe a la Administración de resolver en plazo y motivar sus decisiones**.

El Consejo, en el ejercicio de su función de garantizar el derecho de acceso a la información pública, ha de **instar a que resuelva las solicitudes que se le presenten**, y no puede dar lugar a que el incumplimiento de este deber legal, sea una traba más al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, que desde luego ha de reconocerse si dentro de los límites legales, la administración reclamada no resuelve motivadamente sobre su ejercicio y sus límites.

SÉPTIMO.- Hemos de señalar finalmente que, conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, la **actuación de este Consejo es de carácter revisor de la actuación de la Administración** en relación con el derecho de acceso a la información, y por tanto **no puede suplantar a esta en su función de limitar o ponderar el ejercicio de tal derecho atendiendo a su configuración legal**.

Por lo anteriormente expresado, dado que la documentación solicitada, tiene la condición de **información pública**, y a la vista de que no se ha manifestado por parte de la Administración reclamada que se presenten, en el acceso solicitado, impedimentos que determinen la posible concurrencia de los límites recogidos en los artículos 14 y 15 de la LTAIBG, ni la existencia de causas de inadmisión del artículo 18, **este Consejo considera que procede estimar la reclamación**.

III. RESOLUCIÓN

Primero. ESTIMAR LA RECLAMACIÓN R-014-2023, PRESENTADA EL 19/2/2023 POR [REDACTED] [REDACTED] FRENTE AL AYUNTAMIENTO DE MURCIA, DEBIENDO CONCEDER EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SOLICITADA, EN CONCRETO A COPIA DE LA MEMORIA Y PLANOS DEL EXPEDIENTE 10808/2017-LE.

Segundo. Que en el plazo de 15 días hábiles se proceda a ejecutar la presente resolución, facilitando la información al reclamante y dando cuenta de ello a este Consejo.

Tercero. Invitar al reclamante a comunicar a este Consejo cualquier incidencia que surja en la ejecución de esta resolución y que pueda perjudicar sus derechos e intereses.

Cuarto. Notificar a las partes que contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Murcia que por turno corresponda, de conformidad con lo previsto en los artículos 8.3 y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Quinto. Una vez notificada esta resolución se publicará en la página web del Consejo, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.

Lo que se notifica para su conocimiento y efectos oportunos.

El Secretario Suplente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia.

Carlos Abad Galán.

(Documento firmado digitalmente)